

**LA EMPRESA COMO PIEDRA ANGULAR DEL POSTCONFLICTO EN
COLOMBIA**

**PRESENTADO POR:
ANDRÉS GUSTAVO MORENO GAITÁN
CÓDIGO: d0102226**

**TUTOR:
Dr. JUAN CARLOS PÉREZ**



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (FAEDIS)
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA
ENSAYO OPCIÓN DE GRADO**

Bogotá, D.C.

2015

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	5
2.1 Objetivo General.....	5
2.2 Objetivos Específicos.....	5
3. DEBATE ALREDEDOR DE LAS CONVERSACIONES DE “PAZ”.....	6
3.1 Posición del sector empresarial.....	7
4. IMPACTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA.....	8
5. INCIDENCIA HISTÓRICA DE LA ECONOMÍA EN LA VIOLENCIA DEL PAÍS.....	10
6. SECTORES MÁS AFECTADOS POR EL CONFLICTO	12
7. ROL DE LAS EMPRESAS EN EL POSTCONFLICTO.....	16
7.1 Responsabilidad social de las empresas colombianas.....	16
7.2 Programas y estrategias en pro de la paz desde el sector empresarial...	18
7.3 Apoyo frente a la reintegración.....	24
7.4 Apoyo a las víctimas del conflicto.....	26
7.5 Apoyo a la Fuerza Pública.....	27
8. INCIDENCIA ECONÓMICA DE POSTCONFLICTOS INTERNACIONALES...	28
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	29
10. Bibliografía.....	33

1. INTRODUCCIÓN

Colombia atraviesa actualmente por un escenario único en más de 60 años de historia, la oportunidad de acabar con el conflicto armado más antiguo del continente y que ha visto sumida a nuestra nación en una pérdida constante de recursos financieros, físicos, humanos y de tiempo, lo cual ha generado que nuestro país no haya explotado su potencial al ciento por ciento y por ende no haya evolucionado integralmente en los ámbitos políticos, sociales y principalmente económicos.

Sin embargo, Colombia representa un caso sub generis no solo en la región sino en el mundo, la “ecuación” de cualquier político, economista, administrador y/o analista sería: “entre más violencia en un país mayor será su pobreza”; sin embargo, cabe resaltar que nuestro país a pesar de tener más de medio siglo de violencia radicalizada, viene sobresaliendo regionalmente en la actualidad por tener uno de los mejores índices económicos del hemisferio.

Por ende, esta ecuación ha sido modificada por un factor particular “su gente y sus empresas”; ahora bien, esta situación genera algunas preguntas ¿qué sería de Colombia sin violencia? ¿Podrá Colombia sobresalir como una potencia mundial, capitalizando sus múltiples recursos? ¿Qué pasaría si nuestra nación no gastara la mayor parte de su producto interno bruto en defensa y estos recursos estuvieran destinados a la inversión social y al crecimiento de sus empresas e instituciones?

Si nuestra nación ha sido capaz de salir adelante y sobre salir regional y mundialmente a pesar de vivir en un escenario de tanta divergencia del crimen como la guerrilla, el narcotráfico, paramilitarismo, bandas criminales, delincuencia común y organizada, y el peor de todos la corrupción, ¿a dónde llegaría nuestra nación sin ellas?; pero el primero de los pasos es dar por terminada una matanza

de colombianos por colombianos, un conflicto sin sentido entre las fuerzas del estado y la insurgencia de la guerrilla que tiene como su máximo exponente criminal a las autodenominadas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP” como principal grupo beligerante de nuestro país y principal generador de la violencia en la misma.

Frente al escenario expuesto anteriormente, surge la importancia en que todas las esferas de la nación contribuyan en la terminación del conflicto, su ejecución y evolución, y entre estas debe existir un papel protagónico de las empresas colombianas como la piedra angular del postconflicto en Colombia y factor indiscutible para proyectar aún más nuestro país en el escenario internacional; en este sentido, el presente ensayo está orientado a incentivar al sector empresarial en el apoyo a la terminación del conflicto y lograr una aproximación de cuál debería ser ese rol protagónico de las empresas colombianas frente al postconflicto ¿cuáles serían los principales efectos para las empresas y para nuestro país?.

Igualmente, es indispensable desarrollar todas las estrategias posibles con el propósito de que este conflicto no se transforme en otras formas de violencia, como lo ocurrido con la desmovilización de las ex Autodefensas Unidas de Colombia - AUC quienes se transformaron en Bandas Criminales - BACRIM o en el caso de los conflictos de Centroamérica donde su conflicto se transformó en formas de violencia como las conocidas maras “delincuencia juvenil”.

Tanto El Salvador como Guatemala tuvieron relativo éxito en sus procesos de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – UNRG, respectivamente, pero en ambos países hubo errores en la etapa del postconflicto, conllevando a niveles de violencia y criminalidad extremos, hasta el punto de superar incluso las cifras de homicidio que había durante épocas del conflicto interno.

Es indiscutible que los diálogos con este grupo armado ilegal han generado desconfianza en la población colombiana y actualmente es menos de la mitad de la población quienes la apoyan, pero debemos hacer hasta el último esfuerzo para lograr poner fin a un conflicto que no es rentable para nuestra nación.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Incentivar al sector empresarial para unir esfuerzos en un apoyo decidido a la terminación del conflicto y determinar el rol que deberían asumir las empresas colombianas tanto públicas como privadas en un escenario de postconflicto en nuestro país, así como determinar cuáles deberían ser sus principales contribuciones frente al logro de esta meta y en la evolución de la misma.

2.2 Objetivos Específicos

- Determinar cuál es el impacto económico de la violencia en un país, y cuál ha sido este impacto en Colombia.
- Resaltar cual es y cuál debería ser la posición más acertada de las empresas frente al proceso de paz y frente al postconflicto.
- Lograr una aproximación a la responsabilidad social del factor empresarial en la violencia de nuestra nación y cuál debería ser la responsabilidad social frente a la terminación de la misma.

3. DEBATE ALREDEDOR DE LAS CONVERSACIONES DE “PAZ”

Desde el fracaso de la mesa de negociación en el Caguán del ex Presidente Andrés Pastrana Arango en el año 2001, Colombia encuentra dos dirigentes políticos con una decisión determinada en acabar con el conflicto armado de Colombia, uno de ellos el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez quien con su política de “mano dura – corazón firme” decide combatir los grupos armados ilegales de una manera determinada y el otro de ellos el ex Ministro de Defensa y actual Presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien decide continuar con la política de combate frontal contra estos grupos pero con un ingrediente adicional, capitalizar estos golpes contra la guerrilla de las FARC para sentarlos en el marco de un proceso de paz que se desarrolla desde hace más de dos años en La Habana (Cuba) y busca inicialmente la terminación del conflicto con ese grupo armado ilegal.

Cuando fue confirmada y publicada la existencia de una mesa de diálogo, se produjeron diversas reacciones, tanto a nivel individual como grupal, al interior de Colombia y en otros lugares; en Colombia, el sector del “uribismo” y algunos como el Procurador General de la Nación se mostraron en contra de las discusiones argumentando que se produciría impunidad con los guerrilleros y hacia las víctimas del conflicto.

Por su parte, sectores como el liberalismo, el Partido Verde, el Movimiento Progresista, el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica y demás agrupaciones políticas, y sociales (campesinos, estudiantes, indígenas, algunos empresariales y eclesiásticas), han manifestado su apoyo a las discusiones, aduciendo que la única salida al conflicto armado no es la vía militar sino concertaciones bilaterales; en el mismo sentido en el concierto internacional, los diferentes estados “aproximadamente 80” han manifestado su apoyo, así como organismos de carácter multilateral y organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, estos diálogos se han visto opacados por la extensión en el tiempo, la división de pensamientos por la oposición política y por los diferentes actos de violencia que se han producido en el país, reduciendo considerablemente este apoyo, ya que lo que no ha entendido el común denominador de las personas es que se viene dialogando en el marco de la guerra, y es exactamente con el fin de terminar con esta violencia que se necesitan resultados positivos en la terminación del conflicto y no extender en el tiempo una guerra sin fin por la vía armada.

3.1 Posición del sector empresarial

La Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Ideas para la Paz y el Instituto Catalán Internacional para la Paz, realizaron en el mes de abril de 2015 una encuesta para conocer las percepciones y posibles aportes de los empresarios al proceso de paz, quienes reconocen que, de llegar a un acuerdo, éste generaría beneficios económicos; es importante señalar que esta encuesta permite realizar una radiografía sobre la posición de este importante sector del país.

La encuesta fue realizada a **1328 gerentes y propietarios de empresas de Bogotá**, que pone en evidencia que hay cierto escepticismo frente al proceso de paz, pues no hay una mayoría contundente que lo respalde: el **55% está de acuerdo** y el **45% no lo respalda**. No obstante, los empresarios reconocen las ventajas de lograrse un fin al conflicto. Entre quienes manifiestan su optimismo respecto a los diálogos **34% considera que generarán bienestar y desarrollo al país**, 18% que son el camino para consolidar la paz, otro 18% sostiene que son la mejor alternativa y 17% que se reduciría la violencia en el país.

En términos económicos, los empresarios destacan los beneficios que podría tener una negociación exitosa. **El 85% manifestó que se vería reflejada en un aumento de la inversión extranjera y el 72% considera que se aceleraría el crecimiento económico; así mismo, se destaca el optimismo por el**

incremento en las ventas de las empresas, la reducción del nivel de pobreza del país y la mejoría en la distribución del ingreso.

El aspecto en el que se espera mayor aporte de los empresarios es el postconflicto, por la posibilidad de brindar **oportunidades laborales a quienes dejen las armas**. Sin embargo solo el **53% estarían dispuestos a emplear a un desmovilizado**, el 31% de los empresarios les darían trabajo pero condicionándolo al fortalecimiento de su negocio a través de oportunidades comerciales y la garantía de acceso a la tecnología con menores costos o incentivos como proveer ayuda económica por parte de terceros en los salarios de excombatientes.

En cuanto a los delitos que más afectan al sector económico, los empresarios encuestados reconocieron que la **extorsión y los atentados terroristas** se reducirían. Pero consideran que no habrá efecto en el **contrabando y la corrupción**, al considerar que no tienen que ver con el conflicto armado.

4. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA

De acuerdo al último informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, los conflictos armados y el sentimiento de inseguridad continúan suponiendo una **amenaza para los avances en desarrollo humano, además de tener repercusiones para el progreso nacional**.

En su informe regional de desarrollo humano para América Latina 2013-2014, el estudio analiza y evalúa el coste económico de la violencia en los países latinoamericanos. A nivel macroeconómico, estima que sólo los homicidios restaron un 0,5% al Producto Interno Bruto (PIB) de la región en 2009 (último año del que se tienen datos completos de todos los países). En cifras totales, la renta

per cápita se habría incrementado en 51 dólares sin ese exceso de muertes por homicidio.

Igualmente, este informe señala que la violencia **influye en el gasto de los estados en seguridad, mantenimiento del orden público y justicia**, además, de generar gran **desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía**.

*“...América Latina muestra hoy en día economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero, **el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad**. En la última década la región ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos (informe “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina” 2013-14).*

A partir de la información contenida en la medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) más reciente para 15 países de América Latina, se encuentra que, en 2009, la región perdió 331 millones de años de vida por el exceso de muertes por homicidio. *“...De reducirse los homicidios países como Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela tendrían ganancias de más de un año en la expectativa de vida de sus habitantes...”*

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos – OEA en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos publicado en el año 2009, señaló que la seguridad ciudadana debe contemplarse como una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano, lo cual involucra la interrelación de múltiples actores del Estado y la Sociedad (Informe sobre seguridad ciudadana en las américas 2012.).

5. INCIDENCIA HISTÓRICA DE LA ECONOMÍA EN LA VIOLENCIA DEL PAÍS

En el marco de la mesa de negociación en La Habana (Cuba), fue creada la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, confluyendo 12 analistas del conflicto armado de Colombia, quienes tuvieron diferentes puntos de vista y también coincidencias entre las que se encuentran la existencia de problemáticas en la “construcción” de Colombia que conllevaron a la violencia actual, entre las que se encuentran: **el factor agrario, la debilidad institucional, la desigualdad en los ingresos y la presencia precaria del Estado en muchas regiones del territorio nacional.**

El analista (Javier Giraldo – integrante de la Comisión) señala que la raíz de la violencia del país tienen surgimiento en los conflictos agrarios de los años 20, señalando a los grandes propietarios liberales y conservadores, organizados en torno al Sindicato de Propietarios y Empresarios Agrícolas que más tarde derivó en la Acción Patriótica Económica Nacional, quienes fueron los responsables de una contrarreforma agraria que sería el originador de conflictos futuros.

“Colombia se ha caracterizado por una extrema desigualdad en la distribución del acceso a la tierra agrícola y una grave ambigüedad en torno a los derechos de propiedad. Estos problemas han contribuido a muchos otros males económicos y sociales, entre ellos las oleadas de violencia que recorrieron periódicamente al país durante el siglo XX y parte del siglo XIX”. (Albert Berry)

El analista (Darío Fajardo – integrante de la Comisión), señala que el factor agrario fue el “factor desencadenante” del conflicto social y armado del país, debido a la excesiva concentración de la propiedad rural, el desorden en las formas de apropiación de tierras baldías, débil legitimidad de los títulos de propiedad y “formas de autoridad arcaicas” en la propiedad sin normas laborales.

Igualmente, (María Emma Wills – integrante de la Comisión) argumenta que las políticas de poblamiento y explotación de la tierra baldía dieron origen a un campesinado independiente que no estaba dispuesto a desaparecer del escenario público reconvirtiéndose en trabajador agrario o desplazado urbano.

Así mismo, (Alfredo Molano – integrante de la Comisión), sostiene que la Ley 200 de 1936 relacionada con el régimen de tierras fue el eje alrededor del cual girarían desde los conflictos agrarios sobre que posteriormente se transformaría en la lucha armada de Colombia.

Igualmente, es importante señalar que la prevalencia del conflicto colombiano después de desaparecer los conflictos armados en América Latina, se debió a un manejo inadecuado e insuficiente de los programas de desarrollo, en especial la iniciativa de reformas (agraria, administrativa, tributaria y laboral).

Asimismo, el tema del narcotráfico ha sido un factor decisivo en la continuidad del conflicto colombiano, ya que el impacto que en diferentes regiones ha producido violencia en la disputa por el control de los recursos provenientes del cultivo ilícito, procesamiento y comercialización de la hoja de coca y la cocaína, así como la aparición de diferentes grupos armados en disputa por el negocio tanto de narcotráfico como de microtráfico que tienen implicaciones directas en la economía y desarrollo social del país.

Entre los factores que permiten a los actores armados obtener apoyo y reclutamiento de personas se encuentran las llamadas “causas objetivas”, entre estas la desigualdad de los ingresos y el patrimonio, el alto desempleo rural, la ausencia de oportunidades laborales para la población joven, la persecución a líderes sindicales o populares y la criminalización de los campesinos ligados a cultivos ilícitos, lo cual genera una “disponibilidad” en algunos sectores sociales para ingresar a los grupos armados.

6. SECTORES MÁS AFECTADOS POR EL CONFLICTO

✓ Agrícola y ganadera

El sector agrícola es uno de los sectores de mayor afectación del conflicto armado en Colombia y sobre el cual las empresas deberían centrar un esfuerzo especial en el postconflicto, en el entendido que factores como el narcotráfico generaron la sustitución de los cultivos legales por cultivos ilegales, así como la irrupción de zonas de productividad agrícola por minas y artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo al último informe mundial sobre las drogas publicado en junio de 2015, la producción de cultivos ilícitos se ve impulsada por distintas situaciones específicas, entre las que se encuentran los factores socioeconómicos específicos de la situación familiar, como el nivel de ingresos, las oportunidades de empleo disponibles, el acceso a crédito, la disponibilidad de infraestructuras que permitan el desarrollo, como el acceso a carreteras, la existencia de una red eléctrica y de servicios educativos y sanitarios.

Igualmente, tanto la producción agrícola como la ganadera se han visto afectadas por el conflicto debido al ausentismo de los empresarios locales quienes han abandonado algunas zonas de alta productividad por las amenazas, el secuestro y la extorsión.

Colombia ha sufrido una disminución en su abastecimiento de alimentos con producción nacional, lo cual ha llevado al crecimiento sostenido de las importaciones: durante la última década se pasó de importar 405 millones de dólares en 1990 a 4.750 millones en 2014, mientras que las exportaciones, incluyendo café, se sostienen en el mismo nivel (Centro de Memoria Historia, 2014).

✓ Turismo

La industria del turismo ha sido afectada por las condiciones de inseguridad del país, en especial la llegada de extranjeros que aún ven en Colombia y en los colombianos una mala imagen heredada no solo por la guerrilla y demás actores armados ilegales, sino por el narcotráfico y la delincuencia en las principales ciudades, lo cual se refleja en bajos porcentajes a todo el sector del turismo, entre ellos el sector transporte y el sector hotelero.

Igualmente, aunque las condiciones de movilidad por las carreteras del país han mejorado la situación de seguridad, aún existen compañías de transporte terrestre que interrumpen o no prestan su servicio a ciertos lugares del país, bajo el temor de que sus vehículos sean objeto de quemas, retenes ilegales y sus compañías de la extorsión en algunas regiones como el oriente del país.

✓ Infraestructura

El grupo guerrillero de las FARC han realizado acciones terroristas contra la infraestructura de la nación, resaltando entre estos los oleoductos, pozos petroleros, gasoductos, torres eléctricas, carreteras y puentes con la intención de aislar a las poblaciones y oponerse a la explotación de recursos por parte de empresas extranjeras.

El sabotaje contra este sector, ha generado enormes costos económicos a empresas privadas y públicas; y ha afectado de múltiples maneras a la población civil y al medio ambiente.

✓ Comercio

La centralización de los esfuerzos de la seguridad en el conflicto, ha ocasionado gastos excesivos los cuales podrían capitalizarse para que el sector comercial no

se viera afectado por la proliferación de diferentes delitos como la delincuencia cibernética, entre otros delitos emergentes.

El conflicto le ha significado al país entre 1 y 2 puntos de crecimiento del PIB por año, sumado a la pérdida de crecimiento potencial acumulada por más de 50 años, siendo fuente de empobrecimiento colectivo, esta pérdida corresponde a entre USD \$2,000 millones y USD \$4,000 millones anuales (Badel y Trujillo, 1998; Granada y Rojas, 1995; Rubio, 1997).

Así mismo, el conflicto armado afecta el crecimiento económico de Colombia especialmente en los siguientes factores: fuga de capitales, inversión en las regiones afectadas, acrecienta los costos del sistema de salud, pérdidas de vidas humanas en plena capacidad productiva e incremento del gasto militar. El presupuesto militar, que ha ido creciendo de manera sostenida desde el año 1992, ha contribuido a la disminución de la tasa de crecimiento del país, dado que una parte de este gasto, se hubiera podido destinar mejor a la educación, a la salud, a la ciencia o a la lucha contra la pobreza.

El solo costo económico del “Proceso de Paz”: hasta noviembre de 2014 está calculado en aproximadamente en 15 mil millones de pesos; igualmente en la búsqueda de este propósito el gobierno nacional ha suscrito créditos externos con entidades y gobiernos internacionales.

El desplazamiento genera en las víctimas un desarraigo debido a la ruptura con su entorno cultural y conduce a un empobrecimiento drástico; igualmente, el desplazamiento del campo a la ciudad implica para la persona o las familias afectadas enfrentar un entorno extraño para el cual no cuenta con las habilidades laborales necesarias.

Los empresarios se encuentran entre las víctimas más frecuentes del secuestro (País Libre, 2104), quince por ciento son comerciantes, ganaderos, agricultores,

empresarios e industriales. Entre los empresarios, el grupo más golpeado son los comerciantes (63%), los ganaderos (20%) y los agricultores (16%).

Igualmente, la extorsión realizada por las FARC ha tenido efectos similares a los del secuestro en el plano económico: disminución del capital productivo, fuga de capitales, aumento de los costos de transacción debido al aumento desmesurado de los costos fijos en seguridad y protección. "...Tanto el secuestro como la extorsión han afectado las tasas de crecimiento de las regiones afectadas por estos delitos y han coadyuvado al desplazamiento de la población afectada, la cual incluye tanto a la población campesina de bajos recursos como a sectores empresariales (Gustavo Duncan, analista).

✓ Zonas urbanas

El desplazamiento forzado hacia las grandes ciudades genera que estas personas se vinculen al sector informal de la economía (venta en semáforos), así como un aumento de la tasa de desempleo, la indigencia y la violencia caracterizada por la situación de pobreza.

Igualmente, estos desplazamientos han generado el aumento en las ciudades de Colombia asentamientos ilegales, pero esta situación se ha visto reflejada en ciudades de otros países en especial de Latinoamérica, generando a estas ciudades problemáticas sociales y de seguridad.

✓ Zonas rurales y fronteras

Las minas antipersonales ubicadas en un considerable número de sitios de nuestro territorio nacional, así como otros artefactos explosivos improvisados han obstaculizado el progreso de diferentes regiones rurales y fronteras de Colombia, así como la dificultad de asistir algunos sectores cuando ocurren catástrofes

naturales o por la naturaleza del conflicto, conllevando a que estos lugares se vean rezagados al crecimiento por su ubicación.

El sector rural se ha visto afectado por el desplazamiento forzado que ha conllevado a que las personas en especial campesinos abandonen su localidad de residencia, así como su actividad económicas habitual. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados - ACNUR, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de desplazados internos y el octavo lugar por el número de refugiados en el exterior, incluyendo tanto a quienes han tomado estas opciones por razones económicas como por factores de supervivencia y seguridad.

✓ Minería

El sector minero junto a los sectores del comercio, agroindustria y ganadería, ha sufrido la depreciación de recursos económicos, debido a la extorsión y boleteo (coacción o amenaza), acentuándose en los contextos donde los actores armados ejercían control territorial y de la oferta de protección que supuestamente se derivaba de este (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014)

En este mismo sentido, la minería ilegal ha sido empleada como una fuente de financiación junto con el narcotráfico para diferentes actores armados ilegales entre los que se encuentra las FARC, entre los que se resalta la explotación ilegal de minas de oro, uranio y coltán, conllevando igualmente a la afectación del medio ambiente y la salud de la población por la indebida explotación de estas minas.

7. ROL DE LAS EMPRESAS EN EL POSTCONFLICTO

7.1 Responsabilidad social de las empresas colombianas

La Responsabilidad Social Empresarial RSE; es la visión integral de la sociedad y su desarrollo, que comprende las dimensiones social, ambiental y económica de

las organizaciones (Guía Técnica Colombiana GTC 180), por lo cual el crecimiento económico y la productividad están asociados con las mejoras en la calidad de vida de las personas y organizaciones comprometidas con las libertades, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente” (ICONTEC, 2008).

La responsabilidad que tienen las compañías con la sociedad más allá de su gestión económica y de sus obligaciones legales es el compromiso de contribuir con el desarrollo económico trabajando con los empleados, las familias, la comunidad local y en general con la sociedad para mejorar sus condiciones de vida”. (Heincke)

La empresa tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de las comunidades donde existen intereses relacionados con su actividad, por lo cual debe incluir acciones que van desde las inversiones sociales y ambientales, así como el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil; cuando el trabajo con la comunidad se diseña y ejecuta en forma estratégica, brinda un efecto ganar-ganar, en el que se agrega valor a las comunidades y se contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente y al mismo tiempo se fortalece la imagen de la empresa. (Claudia Liliana Peña, 2014)

Frente a la problemática del conflicto interno armado de Colombia, se han visto diferentes comportamientos negativos de las empresas, entre las que se encuentra la pasividad, desentendimiento y desconocimiento con las estrategias de apoyo que se implementan por parte de diferentes actores gubernamentales y de la sociedad; igualmente la mayoría de las empresas no toman en cuenta este factor del conflicto armado frente al diagnóstico DOFA de su empresa y la amenaza que representa para la misma.

Así mismo, la sociedad y las empresas deben entender que así como hay algunas organizaciones que perciben recursos de forma directa o indirecta del conflicto armado como los fabricantes y distribuidores de armas y dotaciones militares, las

mismas instituciones de seguridad del estado e indirectamente las empresas de vigilancia privada y las empresas aseguradoras, la terminación del conflicto permitirá a muchos más sectores productivos del país mejorar la situación económica así como el incremento de más y mejores empleos en el país.

Así mismo, es necesario que las empresas inviertan en la construcción de paz por medio de proyectos de desarrollo local, regional y nacional, ya que los costos económicos del conflicto son altos, y la paz duradera va de la mano del desarrollo, así como los intereses empresariales de largo plazo dependen de la solución del conflicto.

Igualmente, es sumamente relevante que el sector empresarial participe e incida de una manera protagónica en las conversaciones de paz y contribuya de una forma didáctica y cultural a que los ciudadanos conozcan la evolución y den su apoyo al proceso y no se dejen manipular por medios públicos y redes sociales que muestran la información de una forma sesgada.

7.2 Programas y estrategias en pro de la paz desde el sector empresarial

7.2.1 Programa “Tiendas de Nuestra Tierra”

Las empresas Visa Inc., Linio y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, han desarrollado el programa “Tiendas de Nuestra Tierra” proyecto empresarial que busca que emprendedores en situación de pobreza y vulnerabilidad puedan acceder al comercio electrónico como un canal de ventas para sus productos.

Este proyecto está compuesto por más de 16 empresarios, pertenecientes a población en situación de vulnerabilidad y pobreza, algunos víctimas del conflicto colombiano, que han encontrado en el emprendimiento una oportunidad de desarrollo económico y social, los cuales entrarán en el mundo de las ventas

online a través de Linio, el portal de E-Commerce más grande de América Latina, que cuenta en Colombia con más de 11 millones de visitas al mes.

Este trabajo de cooperación entre Visa Inc., Linio y el PNUD fomenta el comercio en línea y los medios de pago electrónicos, como mecanismos para la promoción del desarrollo y la inclusión económica; este programa facilita a la población vulnerable un modelo de negocio Marketplace que inicia desde la educación financiera de sus participantes hasta el mercadeo a consumidor final. El piloto empezará con un grupo de empresarios que producen artesanías, joyería, productos textiles, mochilas, zapatos, artículos de decoración en madera entre otros, y se espera que al final del año 2015 se logre la integración de 100 empresarios de todo el país.

7.2.2 Campaña “RespiraPaz”

Esta campaña es promovida por la Organización de las Naciones Unidas ONU – Colombia, como iniciativa que busca ayudar a generar en el país una cultura que reconstruya un tejido social que se ha visto afectado por el conflicto armado; orientada a lograr un acuerdo de paz como factor fundamental, pero no suficiente; también es necesario un ambiente propicio a la paz, en el que la sociedad esté dispuesta a dejar atrás las anteriores maneras de pensar y de actuar.

El objetivo de la campaña es aportar a una cultura de paz, abonar el terreno social para que un acuerdo en La Habana pueda echar raíces y florecer en Colombia, la campaña parte del ejercicio más básico del ser humano, respirar, controlar los sentimientos es impedir que la rabia, el rencor y el odio dominen.

RespiraPaz fue elaborada gracias al apoyo financiero del Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y, previamente, al apoyo del gobierno de Noruega que financió la pre-campaña “La paz es mía” a finales del año pasado. El trabajo creativo es de la agencia de publicidad Sancho BBDD, e incluye

comerciales, una radio novela y un comic para niños y niñas. Estará presente en los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades y cuenta ya con una canción de Bomba Estéreo. Además cines itinerantes que recorrerán Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Córdoba, Meta y Vichada donde mostrará a las comunidades la película colombiana Mateo.

Las guerras tienen muchas causas “políticas, económicas y sociales, entre otras” pero se perpetúan gracias a una energía destructiva infinitamente auto-renovable: el odio que cree el odio, el miedo que produce más miedo, la desconfianza que nutre más desconfianza; la reconstrucción del tejido social implica romper con la lógica destructiva y promover la creación de una relación de confianza y de aceptación mutua entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y el Estado (Fabrizio Hochschild)”.

7.2.3 Escuela de liderazgo para la paz

A partir de una iniciativa convocada por Indepaz y la Alianza por la Paz y el Desarrollo de Arauca con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se hizo el lanzamiento en el mes de junio de 2015 en Arauca de la Escuela de Liderazgo para la Paz, con el fin de que organizaciones sociales y populares, líderes comunitarios, campesinos e indígenas de Arauca, Tame, Saravena y Fortúl (Arauca), con el objetivo generar un espacio regional de intercambio de experiencias a través del cual se identifiquen propuestas de agendas locales para la construcción de la paz regional, se conecten actores sociales y se faciliten conversaciones hacia la construcción de un objetivo compartido: la paz.

7.2.4 Campaña #SoyCapaz de la ANDI

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, entre el 8 de septiembre al 10 de octubre del 2014, lanzó una campaña con 120 empresas del

país, la cual estuvo dirigida a fomentar la cultura de la paz en los colombianos, empleando emisoras, marcas que simbolizaban la paz en diferentes productos, mensajes de texto y la creación de un video musical en el cual participaron reconocidos cantantes colombianos.

Los eventos enmarcados en la campaña tuvieron como común denominador la confluencia y la unión en algún sentido: programas de radio de una cadena transmitidos desde los estudios de la otra, entregas de productos de una marca en camiones de la competencia, empleados vestidos todos de blanco, enfocado a movilizar esa voluntad que se supone que todos tenemos en Colombia de que haya paz e iba a hacer que mucha gente se dé cuenta de que la paz es un asunto de todos y que todos debemos poner “nuestro granito de arena”.

Si la gente que sale en televisión, la que da la cara en las oficinas, la que interviene para resolver los conflictos ciudadanos, si toda esa gente da ejemplo, pero no solamente del 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, es más probable que la gran masa de ciudadanos anónimos se dé cuenta de lo bien que funcionan las cosas si todos le buscamos el ladito a la violencia. Ese debería ser nuestro objetivo cultural. (Luis Manuel Silva – 2015).

Esta campaña no se trató de un apoyo formal al proceso de paz, sino que tuvo un objetivo transformador: poner la responsabilidad de la paz en cabeza de la sociedad, cambiando la lógica de que esta depende solamente de las FARC, la campaña buscó que los colombianos fueran capaces de reconocer que somos parte del problema y podemos ser parte de la solución, así como de entender que hay un interés común que supera nuestras diferencias. (Álvaro Forero Táscon).

7.2.5 Estrategia de trabajo en construcción de paz desde el sector empresarial en Colombia

Esta estrategia es una iniciativa conjunta en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, la Fundación Ideas para la Paz – FIP y el Consejo Internacional de Industria Sueca – NIR, fundamentada en los siguientes elementos:

- ✓ El sector privado como un actor clave en la construcción de paz: El reconocimiento del sector privado como un actor clave en la superación del conflicto armado y la construcción de una paz sostenible, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades y recursos, y su relación con los territorios y las dinámicas particulares de cada uno.
- ✓ La construcción de paz como el eje central de la iniciativa: El convencimiento de que la construcción de paz es necesaria para superar las condiciones que reproducen el conflicto armado en Colombia.
- ✓ Formulación de estrategias y herramientas prácticas para el sector privado en materia de empresas y construcción de paz: La necesidad de las empresas de contar con estrategias y herramientas prácticas que puedan integrar dentro de su gestión y que estén orientadas a la superación del conflicto y la construcción de una paz sostenible.

En el marco de esta estrategia, se creó el Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial, Derechos Humanos y Construcción de Paz, como herramienta de consulta para que el sector empresarial y otros grupos de interés puedan acceder de manera práctica a estos temas.

7.2.6 Programa de Responsabilidad Social Empresarial con la niñez

Las fundaciones Batuta, Bolívar Davivienda, Notas de Paz, Fundación Éxito y Fosbo, apoyan a cerca de 302.000 niños en todo el país quienes aprenden música clásica, experimental, jazz, folclórica, urbana y otros géneros más, en el marco de sus programas de responsabilidad social que tienen como principal eje la música como factor de cambio.

Entre las empresas que lideran el apoyo de estas fundaciones, ya sea con dinero o prestando algún tipo de bienes y servicios, están Ecopetrol, Cine Colombia, Gas Natural Fenosa, el Ministerio de Cultura, el Grupo Bolívar, la Cancillería, Nutresa, Gases de Occidente, Grupo Éxito, Promigas, Banco de Bogotá y otras, las cuales tienen el objetivo en común de brindar nuevas oportunidades de vida a los niños y jóvenes del país, entre estos niños en condición de vulnerabilidad por la violencia.

7.2.7 Desarrollo alternativo (Informe mundial de las drogas 2015)

A partir del apoyo de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, diferentes países vienen desarrollando proyectos y planes frente al Desarrollo Alternativo como un enfoque destinado a reducir la vulnerabilidad que da lugar a que la población se dedique a producir cultivos ilícitos y, en última instancia, a eliminar esos cultivos.

El desarrollo alternativo puede romper el círculo vicioso caracterizado por el aumento de la producción ilícita de drogas, el debilitamiento del estado de derecho, la contracción del crecimiento de la economía lícita, la reducción de las inversiones en sectores lícitos, el fortalecimiento de la delincuencia organizada y el aumento de la violencia, al promover de un modo eficaz factores que fomentan una economía lícita sostenible. A largo plazo, ello puede contribuir a atraer inversiones y a desarrollar la infraestructura necesaria y, en consecuencia, a modificar y preservar los medios de subsistencia de las comunidades rurales.

En términos generales, el desarrollo alternativo no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para lograr un fin, contribuir a crear un entorno propicio para un desarrollo rural a largo plazo sin cultivos ilícitos. El desarrollo alternativo actúa como catalizador, impulsando el desarrollo de las zonas que afrontan problemas concretos relacionados con la economía de las drogas ilícitas.

Diferentes experiencias han puesto de manifiesto que existe la posibilidad de aplicar estrategias de desarrollo alternativo para combatir actividades ilegales que no sean el cultivo ilícito. El desarrollo alternativo podría utilizarse para apoyar a las comunidades afectadas, por ejemplo, por el tráfico de drogas, la minería ilegal o los delitos contra la flora y la fauna silvestres y los bosques. Teniendo en cuenta esas aplicaciones más generales, el concepto de desarrollo alternativo podría ampliarse mucho más allá de la actual estrategia de “desarrollo alternativo preventivo”, que se centra en las zonas que corren el riesgo de ser utilizadas para la producción de cultivos ilícitos.

7.3 Apoyo frente a la reintegración

De acuerdo a la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR, entidad encargada de diseñar, coordinar y ejecutar con entidades públicas y privadas la política estatal dirigida a la reintegración de las personas o grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado voluntariamente, desde el año 2003 a febrero del 2015 se han desmovilizado un total de 57.082 personas, de las cuales el 54% corresponde a las AUC, 38% FARC, 7% ELN y 1% otros grupos.

RUTA DE REINTEGRACIÓN: El Gobierno Nacional, a través de la ACR, diseñó una política de reintegración de largo plazo, que promueve el compromiso y esfuerzo de todos los colombianos por brindar oportunidades de cambio a las personas desmovilizadas, para fortalecer la reconstrucción del tejido social,

promover la seguridad, el desarrollo comunitario, la convivencia y la construcción de la paz.



Figura 1. Ruta de la Reintegración (Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración)

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN EL INDIVIDUO: busca que las personas en Proceso de Reintegración reconstruyan sus relaciones, asuman y ejerzan sus derechos y deberes, y desarrollen competencias y habilidades que les permitan vivir de manera autónoma y sostenible en la legalidad.

ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN: fortalecen las bases sociales, económicas y culturales de las comunidades receptoras de población desmovilizada. La Política de Reintegración establece que la reconciliación es uno de los principios básicos del proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración. La ACR promueve acciones de Servicio Social que vinculan a personas en Proceso de Reintegración a la solución de problemáticas de la comunidad.

COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES: En Colombia, el Gobierno Nacional lidera el Proceso de Reintegración y aporta el 95% de los

recursos financieros. Sin embargo, ha contado con el apoyo técnico y financiero de diferentes cooperantes del orden público y privado del ámbito internacional.

LA CORRESPONSABILIDAD: La ACR busca decididamente que los actores externos conozcan y se acerquen al Proceso de Reintegración mediante la activación de alianzas que conlleven a que las personas que dejaron las armas y sus familias encuentren las condiciones para vivir dignamente en la legalidad y se sumen a la reconstrucción del tejido social del país.

115 EMPRESAS EN COLOMBIA: le apuestan a la reintegración y la paz, por medio de empleo, capacitación, financiación de proyectos y proveeduría, entre otras iniciativas.

13 UNIVERSIDADES y más de 200 estudiantes universitarios de Colombia se han vinculado al proceso de reintegración.

7.3.1 Empresas referentes frente a la reintegración

Coca-Cola Femsa, con el apoyo de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), creó el “Banco de Tiempo” como una estrategia de capacitación y formación en emprendimiento laboral para excombatientes, a través de la donación de tiempo de los profesionales y colaboradores de la empresa embotelladora.

La Fundación Carvajal creó la Cooperativa de Trabajo Asociado “Mundo Maderas”, un negocio inclusivo con excombatientes encargados de reproducir y reparar estibas en la ciudad de Cali con el objetivos de promover una alternativa de generación de ingresos al partir del emprendimiento, que le permita a los asociados y a sus familias lograr la estabilidad e independencia económica necesarias en el proceso de reinserción a la vida civil.

Estas dos iniciativas dan luces sobre como el sector empresarial puede vincularse y apoyar procesos reintegración, así como contribuir a la construcción de una paz sostenible a través del apoyo socioeconómico de excombatientes.

7.4 Apoyo a las víctimas del conflicto

De acuerdo al último conteo del Registro Nacional de Víctimas (01 de julio de 2015), actualmente hay en Colombia un total de 7.490.375 víctimas, entre las que se encuentran 5.916.381 sujetos de atención y 1.348.778 víctimas directas de desaparición forzada, homicidio y fallecidas, lo que representa el 15% de la población colombiana; entre estas, es importante señalar que las que han recibido el mayor daño son las personas de zonas rurales, principalmente aquellas afectadas por el desplazamiento forzado.

El esfuerzo que viene realizando el Gobierno Nacional a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas ha permitido lograr avances muy importantes frente a la reparación de las víctimas pero insuficientes si no recibe el apoyo de los diferentes sectores de la nación, en especial frente al tema de la atención humanitaria y la reparación integral; ya existen grupos de la sociedad civil que se han unido, como las mujeres víctimas del conflicto que se han unido para crear microempresas.

7.5 Apoyo a la Fuerza Pública

Las reformas policiales siguen siendo uno de los retos pendientes de las democracias de los diferentes países. En este sentido, en Colombia se requiere de la profesionalización de la policía, mediante programas que fortalezcan su capacidad de investigación y el trabajo cercano con las comunidades.

La ejecución exitosa de estrategias preventivas se basa en la profesionalización del personal a cargo de las intervenciones, frente a lo cual es necesario que el

Estado cree alianzas con empresarios y universidades para impulsar esta profesionalización, en especial de la Policía Nacional.

Así mismo, en un escenario postconflicto la Policía deberá volcar todas sus capacidades, habilidades y conocimientos hacia la seguridad ciudadana, sin embargo es indispensable la contribución del sector empresarial quien debe fomentar programas de prevención cultural y comunitaria, en especial en aquellos sectores más propensos a la ilegalidad.

Igualmente, se debe apoyar a las instituciones del estado encargadas de la seguridad y protección en el desarrollo y ejecución de programas en prevención social, especialmente tomando como referencia las familias y su entorno, así como en la educación en niños y jóvenes alejándolos de los factores que los involucren con el delito.

Se debe pensar en los ingenieros militares construyendo obras en un país que tiene 50 por ciento del territorio sin infraestructura. (Cr. Carlos Velásquez).

8. INCIDENCIA ECONÓMICA DE POSTCONFLICTOS INTERNACIONALES

8.1 Caso El Salvador

Los análisis realizados por especialistas de El Salvador, señalan que la economía de su país mostró una inestabilidad entre 1960 y 2000, el PIB de El Salvador creció a una tasa promedio anual de 3 por ciento, afectada por el impacto del conflicto interno en la década de los ochenta, cuando **la economía decreció a una tasa promedio de 2,1 por ciento por año.**

A partir de 1989, en el marco de la fase final de negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla, El Salvador **adoptó un conjunto de políticas económicas orientadas a impulsar una economía de mercado.** La primera

etapa de las reformas buscó estabilizar la economía a través de una **combinación de políticas macroeconómicas e incentivos microeconómicos para la recuperación del crecimiento.**

La economía salvadoreña tuvo un impacto directo por el conflicto, la desviación de recursos para usos militares, y la destrucción de la infraestructura estimada en más de US\$1,500 millones (IMF, 1998), y la pobreza alrededor de 20 puntos porcentuales menor de no haberse producido el conflicto.

A partir de 1989 el ritmo de la actividad económica comenzó a acelerarse, en un clima de menor tensión socio-política por los avances en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Durante la primera mitad de los noventa la economía salvadoreña creció a una tasa promedio de 6,5 por ciento por año.

El impulso fundamental para esta dinámica provino del auge registrado por la demanda de bienes de consumo y de bienes raíces debido a un mayor acceso al crédito bancario y a los mercados internacionales de capitales; igualmente, incidió la repatriación de muchos capitales que habían emigrado durante el conflicto y al notable incremento registrado por las remesas familiares de los salvadoreños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Adicionalmente, costos más bajos de importación en el contexto de la liberalización comercial, valorización de la moneda debido a las crecientes entradas de capitales, así como la expansión del comercio exterior del país por la confianza internacional que causó el postconflicto.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al momento de iniciar este ensayo sabía que nadaba en agua turbias, ya que hablar de paz en un país heredero de la violencia, donde se politizan todos los escenarios y con una cultura del facilismo no es nada fácil desde ninguno de los puntos de vista que se quiera analizar, y claro está que criticar a partir de

información parcial, sesgada o manipulada es más fácil que buscar soluciones a partir del conocimiento íntegro de la problemática.

En este sentido, es claro que la terminación del conflicto armado contra las FARC no se realizará por la vía armada, y la actual coyuntura del país y los avances que se han logrado en el marco del proceso en La Habana, deben ser capitalizados para llegar a un acuerdo con este grupo armado ilegal, y debe existir una negociación bajo el modelo ganar – ganar, donde las dos partes se vean beneficiadas del mismo y donde todos los sectores se unan al logro del objetivo, y es allí donde la empresa juega un rol relevante no solo frente a la terminación del conflicto sino como piedra angular frente al postconflicto.

Aunque muchos de los sectores de la sociedad colombiana han perdido la confianza sobre el proceso que se desarrolla en Cuba, (comprensible de la naturaleza del ser humano, donde su paciencia tiene un límite) no se puede olvidar que en el marco del cese al fuego unilateral se han registrado los índices de violencia por razones del conflicto más bajos en muchos años de historia, y los ataques perpetrados por esta guerrilla después de terminado el cese no es más que un claro ejemplo de presión mediática, buscando un pulso con el Gobierno mostrando su vigencia y que al momento de querer generar acciones de impacto aún cuentan con medios y métodos para hacerlo y que podrían mantener por más décadas, pero lejos de su objetivo político y de unidad armada.

En este sentido, debe existir un compromiso decidido y consensuado por parte de las empresas públicas y privadas como la principal fuerza económica de nuestra nación, no solo en el marco del proceso de negociación con las FARC llevando una cultura de paz a la sociedad civil, sino apostando en tener un rol protagónico en un importante escenario como lo es el postconflicto, mediante un apoyo unísono hacia el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y locales, así como hacia la sociedad civil en la construcción social y económica de la nación.

Aunque no pretendo dar por sentado que los inicios del conflicto armado en Colombia sean exclusivamente económicos, ni desconocer la responsabilidad de los sectores sociales, políticos e internacionales, etc., fue sin duda este factor uno de los fulminantes para que estallará la violencia en el país, y por ende debe ser el mismo sector que conlleve a una paz real y duradera en el horizonte.

A lo largo del ensayo se demuestra la importancia y los beneficios que traería consigo la terminación del conflicto con las FARC, para lograr un mejor desarrollo de nuestro país en todos los ámbitos (políticos, sociales, culturales y económicos), lo que permite vislumbrar una prospectiva económica del postconflicto positiva en el ámbito nacional como internacional.

Aunque el sector empresarial considere que la terminación del conflicto no tendrá efecto en delitos como el contrabando y la corrupción, es importante señalar que todo es un círculo vicioso y cuando se afecta un eslabón se altera de alguna manera el resto del mismo; igualmente, los esfuerzos en seguridad han estado enfocados primordialmente al conflicto, limitando los esfuerzos de los cuerpos de seguridad y la generación de políticas públicas más acertadas en esta materia, por lo cual, la terminación del conflicto permitiría capitalizar la experiencia obtenida por los organismos de seguridad en más de 50 años de conflicto para convertirse en organismos de paz que logren la seguridad ciudadana a nivel urbano y rural.

Recientemente, el Presidente de la República tomó la decisión de nombrar a dos personas claves en pro de la terminación del conflicto y vislumbrando el postconflicto, lo cual permite evidenciar la importancia que genera para el Gobierno Nacional la participación del sector empresarial; estas designaciones fueron el nuevo ministro de defensa Luis Carlos Villegas Echeverri, expresidente de la ANDI y el empresario Gonzalo Restrepo López como nuevo integrante del equipo negociador de paz en La Habana.

Es necesario generar una estrategia que permita centralizar las acciones y esfuerzos que contribuyan al logro de la paz, uniendo lo local, regional y nacional, teniendo en cuenta que las acciones tomadas por algunas empresas han sido dispersas y no han generado el impacto esperado, debe existir una decisión colectiva de los principales gremios del país, en particular, aquellas que puedan coadyuvar por medio de proyectos productivos regionales o por medio del apoyo a los esfuerzos de negociación.

En este sentido, estas estrategias requieren apuestas creativas y ambiciosas, algunas empresas deben fortalecer lo que vienen haciendo y sumar nuevos frentes de acción, pero sobre todo deben aproximarse a la paz de manera innovadora y audaz. En este campo, el sector empresarial ha centrado muchos de sus esfuerzos en apoyar iniciativas orientadas a la población vulnerable en razón del conflicto, algunos frente a políticas de Derechos Humanos en su gestión y otras hacia iniciativas de reconciliación; son éstas las llamadas a que a partir de su ejemplo y estrategias prácticas logren vincular la mayoría de sectores.

Las empresas deberían impulsar una estrategia de cooperación a partir de retos estratégicos enfocados a los siguientes lineamientos: Cultura ciudadana de paz, agro como eje de progreso y desarrollo, fortalecimiento de los organismos de seguridad frente a los nuevos retos, fortalecimiento de la presencia del estado en zonas fronterizas y alejadas, educación como eje de nuevas generaciones con pensamiento renovador, reintegración de excombatientes a la vida civil, apoyo a las víctimas del conflicto y un modelo económico más incluyente.

10. Bibliografía

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI (2014). Antecedentes de la campaña #SoyCapaz.

Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR (diciembre 2014). Reintegración en Colombia Hechos y Datos.

Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR (junio 2014). Generación de Empleo - Generación de Paz.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (2008). Documento Conpes 3554 Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015). Obtenida de <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2015/05/25/>.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015). Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014 “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”.

John Guzmán Pinilla (Junio de 2015). Responsabilidad Social. Obtenida de <http://www.larepublica.co>.

Fundación Ideas para la Paz – FIP (2014). ¿Cómo construir paz desde el sector empresarial en Colombia?

Carlos Velásquez (Mayo de 2015). La fuerza pública que requiere el postconflicto.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Febrero de 2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.

Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos – OEA (2012). Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas 2012.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Informe General del Grupo de Memoria Histórica: ¡Basta ya! Colombia memorias de guerra y dignidad.

Diego Calderón (2014). Reintegración en Colombia: Hechos y datos.

Fundación Ideas para la Paz (2012). Líderes empresariales hablan de la paz con las FARC.

Cámara de Comercio de Bogotá (Diciembre de 2014). Encuesta de percepción de seguridad empresarial.

Claudia Peña (2014). Empresas colombianas comprometidas con la responsabilidad social a partir de la GTC 180.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Junio de 2015). Informe Mundial sobre las Drogas.

Carlos Acevedo (Agosto de 2003). La experiencia de crecimiento económico en El Salvador durante el siglo XX.

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (2015). Informe de Gestión de Gobierno 2012 – 2014.